

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por el C. Andres Pineda, en representacion de D. Vicente Poli y Compañia, contra una sentencia de casacion que pronunció el Tribunal Superior del Estado de Puebla, revocando una arbitral dada en el negocio que sugetaron Poli y D. Pedro Langle á la decision de árbitros.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Los motivos de queja en que descansa el escrito del C. Andres Pineda, que ha dado origen al recurso de amparo promovido contra la sentencia de casacion que pronunció el Tribunal Supremo del Estado, en el negocio que D. Pedro Langle siguió contra la sociedad Poli, consisten esencialmente, en que aunque á los árbitros se les concedió jurisdiccion para que conocieran de determinado negocio, relativo á vecinos de Tlaxcala, no se les extendió á los jueces del orden comun de esta Capital, por ser el Sr. Langle labrador, que no habia renunciado su fuero, pero que aún cuando esto no fuera, el Tribunal mencionado no pudo extralimitarse á fallar sobre lo que no habia sido pedido por los litigantes, atropellando jurisdiccion agena, con desprecio de un artículo de la Constitucion del Estado. Dice, que tal procedimiento viola las garantías que la Constitucion general otorga á todo hombre en su artículo 16.

Desde mi escrito de fojas 11 en que pedí que no se suspendiera el acto reclamado, manifesté que no habia violacion de garantías individuales, fundándome en el bien razonado informe que rindió la autoridad responsable, que se registra á fojas 7, 8, 9 y 10 del expediente; ahora reproduzco esas razones, suplicando á V. C. Juez, se sirva examinarlas con la detencion que merece el

TOMO V.—PARTE II.

caso, así como las otras que paso á exponer, para pedir despues sobre lo principal.

Radicado el negocio seguido entre Poli y Langle, radicado digo, en esta Ciudad, por conocer de él jueces nombrados por las partes interesadas, natural era que cuantas diligencias tuvieran que practicarse en lugares de otra jurisdiccion, hubiera intervenido la autoridad del Tribunal de 1ª instancia, á fin de legalizar los procedimientos; así lo determinaron los jueces árbitros en sus autos de cuatro de Junio y tres de Julio del año próximo pasado que se registran, el primero, á fojas 8 vuelta, y el segundo á la 12 vuelta del cuaderno número 1, que se hicieron saber á los litigantes, quedando conformes.

Seguido el juicio hasta pronunciarse sentencia definitiva, ésta se notificó por el conducto regular, quedando entendida y conforme la sociedad "Vicente Poli y Ca.", sin haber objetado la falta de jurisdiccion que hoy se alega.

La parte de Langle, no sé contentó con el fallo, é interpuso el recurso de casacion.

Se inició pues éste, en la forma conveniente.

Muy al principio el Sr. Poli se opuso á que se admitiera y presentó su escrito de 4 de Noviembre, que corre agregado al expediente relativo, en que habló de falta de jurisdiccion en el Tribunal para encargarse de su conocimiento; mas el Tribunal en uso de sus facultades, resolvió su procedencia, y lo hizo saber á las partes, quienes quedaron tambien conformes. La prueba de conformidad de parte del Sr. Poli, consiste, en que sin salvedad alguna presentó despues sus apuntamientos, en que solicita: (reconociendo desde luego la competencia del Tribunal) que en definitiva se declare (por el Tribunal que hoy se quiere desconocer,) que no existen las infracciones de ley de que se quejó la parte de Langle, en la sentencia pronunciada en el juicio arbitral que siguió con la sociedad de su nombre.

Las circunstancias á que me refiero, es-

tán á fojas 26 vuelta y 38 á la 31, á la 39, á la 42 vuelta y 43 y á la 27, 28, 29 y 30 del cuaderno intitulado: Recurso de casacion. &

Esta es la historia sucinta del negocio que nos ocupa; ¿cuales son pues, los actos que lastiman las garantías que el artículo 16 constitucional otorga al Sr. Poli? Este artículo á la letra dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." ¿Que, las molestias inferidas á los intereses del Sr. Poli; no son una consecuencia precisa de mandamiento escrito de autoridad legítima? ¿no son el resultado de un juicio seguido por todos sus trámites, hasta haberse pronunciado sentencia definitiva, por autoridad previamente establecida por la ley?

Sobre lo resuelto por los Jueces árbitros, que se notificó con oportunidad á los litigantes por el Órgano, que se practicasen otras muchas diligencias, es decir, por el Tribunal de 1ª instancia, nada hay que decir supuesto que favoreció la causa del Sr. Poli, y de ello quedó reconocido. Examinemos los actos del Tribunal Supremo con respecto al recurso de casacion interpuesto por D. Pedro Langle, y veamos si al conocer de él se extralimitó de sus facultades.

Debemos saber sobre todo, esto: ¿el Tribunal debió darle entrada al recurso indicado, en los términos prescritos en la ley de 15 de Julio de 1871? A juicio del que suscribe se debió, en observancia del artículo 153 de esta ley, que previene en su fraccion 7ª, que se admita el recurso contra las providencias finales de jurisdiccion voluntaria, y el 158, que para que se dé la casacion contra los fallos ó providencias de los Tribunales de 1ª instancia y contra las sentencias de los árbitros de derecho, es menester que no proceda el recurso de apelacion; y en el juicio arbitral seguido entre Langle y Poli, ni procedía el recurso de ape-

lacion, porque lo habian renunciado en la escritura de compromiso, y la resolucion de los árbitros fué de reputarse como providencia final de jurisdiccion voluntaria, por la misma causa de haber renunciado el recurso de apelacion y todos los demas que las leyes otorgaban.

Luego por estos capítulos, el Tribunal al darle entrada al recurso, obsequió la ley vigente de procedimientos; y como esta no es anticonstitucional, no violó las garantías que se invocan de parte del Sr. Poli.

Supuesta la legalidad con que se admitió el recurso, ¿el Tribunal pudo anular la sentencia de los árbitros y mandar chancelar la escritura de que hace mérito en su sentencia? Atendiendo á los preceptos del mencionado artículo 151, que expresa: que el objeto del recurso de casacion, es anular y en su caso enmendar los fallos que dicten los Tribunales y jueces árbitros; y á los del 185 que dice: que si el Supremo Tribunal rompiere y anulara la sentencia, y el recurso fuere de casacion por infraccion de ley, dictara la sentencia que crea conforme á los méritos de los autos, crea C. Juez, que sí, y si falló mal, queda á salvo otro recurso contra el fallo, sin que sea el de amparo, que no cabe en los negocios judiciales, segun el artículo 89 de la ley de 20 de Enero de 1869.

El Sr. Poli á todo esto hará la observacion, de que el motivo principal del juicio que nos ocupa, lo hace consistir en que el Tribunal conoció de un negocio que pertenecía á los Tribunales de Tlaxcala, por ser los litigantes vecinos de él, segun lo tienen demostrado.

Para contestar á esta dificultad, debo llamar la respetable atencion de V. sobre los conceptos del artículo 229 de la ley de procedimientos ya citada; son estos: "Tratándose de los laudos que pronuncian los árbitros de derecho á los amigables componedores, se reputará Tribunal, sentenciados para los efectos de esta ley, el Tribunal de 1ª instancia que haya notificado el laudo á los

litigantes." ¿Qué queda que decir á disposiciones tan terminantes? ¿que los interesados tenían renunciado todo recurso, y que el de casacion es uno de tantos que no debía ser admitido? A esto se responde secamente, que el recurso de casacion no es renunciabile por el artículo 237 de la propia ley de procedimientos.

En consecuencia de todo lo expuesto, puede decirse con toda seguridad, que no ha habido infracciones constitucionales en ninguno de los procedimientos del Tribunal Supremo, al admitir y fallar el recurso de casacion, segun se ha demostrado. De esto debe estar convencida la parte quejosa, y si ha insistido en que se le ampare, ha sido con la ilusion de sorprender al Juzgado, presentándole los testimonios que hizo valer con el carácter de prueba.

Estas ya V. verá en que han consistido: en varias certificaciones de los expedientes en que actuaron los escribanos Orea y Gens, en una informacion de testigos que han declarado sobre que Langle y Poli son vecinos del Estado de Tlaxcala, y en el escrito de 4 de Noviembre de que ya he hablado antes, en que pedia se declarara improcedente el recurso, por carecer de jurisdiccion para conocer de él; pero la ineficacia de ellas, así como la malicia con que se promovieron, está demostrada á renglon seguido de las mismas piezas; por eso ni me tomo el trabajo de refutarlas.

Para no fatigar mas la atencion de V. C. Juez, aquí concluyo pidiéndole, se sirva declarar, en terminos de justicia, que no procede el recurso de amparo promovido por el C. Andres Pineda en representacion de D. Vicente Poli, contra el Tribunal Supremo del Estado, por no existir la violacion de garantías individuales del artículo 16 de la Constitucion; y que le imponga una multa de quinientos pesos al Sr. Poli con arreglo al artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, y al artículo 167 de la de 4 de Mayo de 1857, por negársele el amparo tanto por falta de motivo para decretarlo, co-

mo por los términos indignos y poco decentes con que le ha seguido, infringiendo insultos á todos y cada uno de los ilustrados Magistrados que forman el Tribunal, contraviniendo de un modo directo las prevenciones del artículo 166 de la mencionada ley de 4 de Mayo de 1857.

Otrosí digo: que por la falta del tiempo y por no merecer la pena, no contesto al grosero agravio que me infringió el Sr. Poli en uno de sus escritos, cuando dijo: que el Lic. Herrera formuló algunos pedimentos que por condescendencia autoricé; rechazo pues esa calumnia, sin aceptarla por venir proplamente de la pluma del Lic. Zárate, cuya conducta es bien conocida por cuantos funcionarios hay en esta Ciudad, y con particularidad por V. ante quien ha promovido diversos juicios de amparo por casos de leva, y ha tenido motivos para conocerle á fondo; esto puede servir de vindicacion á insulto tan gratuito.

Puebla de Zaragoza, Mayo 13 de 1873.
—*Eugenio Sanchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla de Zaragoza, Mayo 23 de 1873.
—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Andres Pineda, en representacion de D. Vicente Poli, contra el Tribunal Supremo del Estado, por haber revocado en casacion, la sentencia arbitral dada en el negocio que sugetaron él y D. Pedro Langle á la decision de árbitros, con motivo de las diferencias que tuvieron en liquidacion de cuentas; el escrito en que se interpuso el recurso, pidiendo tambien la suspension del acto reclamado; el informe dado por la autoridad responsable; el parecer fiscal á fin de resolver sobre la suspension; lo resuelto por este Juzgado, así como lo acordado por la Suprema Corte de Justicia, para que se sustanciara el juicio y pronunciara sentencia, negando ó concediendo el amparo; lo expuesto por el Ministerio público, al cor-

rérsele traslado para que pidiera en lo principal; las pruebas rendidas por las partes, y las mandadas desahogar de oficio para mejor proveer; lo alegado, y cuanto mas que ha debido verse y tenerse presente.

Considerando; primero: que el procedimiento del Tribunal Supremo, contra el cual se ha solicitado el amparo de la Justicia de la Union, ha sido por haber dado entrada al recurso de casacion interpuesto por D. Pedro Langle, contra el fallo que pronunciaron los jueces árbitros, en la cuestion suscitada sobre pago de la cantidad de cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos, treinta y cinco centavos, que en liquidacion de cuentas se le creyó deudor, á quienes se sugataron segun convenio, bajo la pena de dos mil pesos que entregaría el que no se conformara con el laudo; pues que siendo ambos litigantes vecinos de otro Estado, no fué competente el Tribunal, y sin que Langle pudiera haber renunciado su fuero de labrador, así como porque extralimitó sus facultades fallando aun sobre lo que no se pidió; todo lo que haya importado violacion en perjuicio del quejoso, de las garantías que otorga la Constitucion en su artículo 16, por las molestias inferidas en su persona é intereses.

Segundo: que por las constancias que obran en los autos remitidos por los jueces de 1ª instancia, aparece: que los árbitros, en la sustanciacion del juicio, ocurrieron al Tribunal ordinario del Estado para el desahogo de diligencias, habiendo los litigantes llegado á someterse á su jurisdiccion; pues aun despues de fallado el negocio le pidieron que decidiera algunos puntos (expediente número 1 fojas 19, 20 y 21) habiendo llegado el representante de Poli hasta solicitar la ejecucion de la sentencia, de cuyo escrito pidió su desglose (razon de fojas 22 vuelta); que para interponer D. Pedro Langle el recurso de casacion, pidió testimonio del laudo de los jueces árbitros, el cual se le mandó expedir con citacion de la parte contraria, la que no se opuso (fojas 24 y 25); que

pedidos los autos por el Tribunal Supremo al inferior, para calificar si era ó nó de admitirse el recurso, se remitieron con conocimiento de los interesados, quienes estuvieron conformes (fojas 30 vuelta); que así mismo aparece en el Toca, que se mandó por el Tribunal Supremo, que si bien es cierto que el apoderado de Poli impugnó el recurso, no por eso desconoció la competencia de ese Tribunal, para calificar si procedía ó nó; y una vez resuelto que era de admitirse, se conformó, habiendo pretendido que en definitiva se declarara, que no habia infraccion de ley en el fallo de los árbitros (fojas 16, 17, 18 y siguientes.)

Tercero: que si pues los litigantes se sometieron á la jurisdiccion de los tribunales ordinarios del Estado, es fuera de duda, que prorogaron su jurisdiccion, de lo cual resulta su competencia, (ley 32 tít. 2º Part. 3ª y ley 7 tít. 29 lib. 11 de la Nov. Recop.), sin que la circunstancia de que sea labrador Langle, pueda favorecerle á su contrario, ya porque la Constitucion de la Republica no establece el fuero de los labradores, como porque la escepcion alegada solo podría hacerse valer por aquel.

Cuarto: que no siendo el recurso de casacion renunciable, segun lo prevenido por el artículo 237 de la ley de 15 de Julio de 1871 del Estado, el Tribunal Supremo ha debido darle entrada al proceder y sentenciarlo conforme á ella, á la que han debido sugetarse Langle y Poli, por el mismo hecho de haber prorogado la jurisdiccion de los Tribunales ordinarios del Estado.

Quinto: que con arreglo á lo dispuesto por el artículo 229 de la citada ley, se reputa Tribunal sentenciador para los efectos de ella, tratándose de los laudos que pronuncien los árbitros, el Tribunal de 1ª instancia que haya notificado el laudo á los litigantes; y en el presente caso es visto que debe reputarse Tribunal sentenciador, el Juzgado de 1ª instancia de la Capital del Estado, que fué quien lo notificó.

Sesto: que si pues el Tribunal Supremo

ha sido competente para conocer en el recurso de casacion promovido por Langle, el artículo 16. de la Constitucion, no favorece el intento del quejoso, cuando ha habido tambien causa legal para proceder, fundada y motivada, segun aparece en el juicio respectivo.

Sétimo: que se advierte claramente la temeridad y malicia con que se ha promovido el presente amparo; lo primero, por haberse intentado en negocio judicial, contra el tenor expreso del artículo 8º de la ley de 20 Enero de 1869; y lo segundo, por haber pretendido el apoderado de Poli, que solo apareciera acreditado lo que no podia de manifiesto la verdad de las cosas, para así conseguir su objeto; habiendo resistido, ó opúéstose, á que se remitiesen constancias al Juzgado, que debian comprobar los hechos; y que se necesitaban, por que siendo negocio dirigido por el C. Lic. Miguel M. Zárate, era de temerse que se desfiguraran las cosas, por haber ya patrocinado en juicio de amparo, que ha seguido en este Juzgado, en que han resultado falsos los testigos.

Octavo: que el apoderado de Poli ha desobedecido el tachar las palabras ofensivas, de que hizo uso en su escrito que obra en el cuaderno de pruebas; habiéndose tambien hecho acreedor el abogado que lo firmó, á que se le aplique alguna pena, de conformidad á lo prevenido por el artículo 169 de la ley de 4 de Mayo de 1857.

Por cuyas consideraciones, y atencion á no tener aplicacion en el caso lo dispuesto por el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, y á lo que tambien dispone en sus artículos 8º y 16, se declara: que la Justicia federal no ampara ni protege á Don Vicente Poli, contra el Tribunal Supremo del Estado, por haber conocido y fallado en el recurso de casacion interpuesto por D. Pedro Langle, contra el laudo pronunciado por los árbitros, en el negocio que sujetaron á su decision, sobre pago de la cantidad de \$4174 35 centavos; que deberá pagar la multa de \$200 á que se ha conde-

nado; que es de hacerse uso del apremio, para que el C. Andres Pineda cumpla con la prevencion de este Juzgado, contenida en auto de 25 de Abril del presente año; y por último, se condena al C. Lic. Miguel M. Zárate, á una multa de \$50 que enterará en la Gefatura de Hacienda.

Hágase saber; cúide la secretaría de que la parte de Poli reponga las hojas de papel comun en que se ha actuado, con las del sello correspondiente; publíquese esta sentencia en el Periódico oficial del Estado, y en el Semanario Judicial de la Federacion, remitiéndose al efecto copias certificadas; y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia para su revision.

El C. Juez de Distrito del Estado, definitivamente juzgando, así lo proveyó, mandó y firmó.—*Antonio Rivero.*—Ante mí *Antonio Garcia Mozqueira.*

Es copia que certifico, y se saca para su publicacion en el Semanario Judicial de la Federacion, en cumplimiento de lo mandado.

Puebla, Mayo 26 de 1873.—*Antonio Garcia Mozqueira.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 7 de 1874. Visto el juicio de amparo promovido por el C. Andres Pineda, en representacion de D. Vicente Poli y Cº, contra una sentencia de casacion que pronunció el Tribunal Superior del Estado de Puebla revocando una arbitral dada en el negocio que sujetaron Poli y D. Pedro Langle á la decision de árbitros, sobre diferencia en sus cuentas, y cuyo arbitraje pactaron por escritura pública, con cuyo acto reputa violadas el quejoso en su persona, las garantías que otorgan los artículos 16 y 27 de la Constitucion. Visto el informe del Tribunal, en que alega entre otras razones para fundar su jurisdiccion, la de que los árbitros que pronunciaron el laudo, eran vecinos del Estado, y por

consiguiente estaban sujetos á la jurisdiccion del Tribunal del mismo. Visto el parecer del C. Promotor fiscal; las pruebas rendidas por Poli; la sentencia del Juzgado de Distrito de Puebla y cuanto mas de autos consta y se tuvo presente, y apareciendo de autos: que siguiendo un litigio Poli y Langlo ante el Juzgado de 1.^a instancia de la capital de Tlaxcala, por considerar el primero deudor al segundo de una cantidad, como resultado de liquidacion, en el curso del juicio celebraron una transaccion para terminarlo, presentando al Juzgado un convenio, cuyas cláusulas se elevaron á escritura pública; una vez aprobado por la autoridad que conocía de la demanda, con todos los requisitos legales de la transaccion judicial, que la escritura que nació de esta transaccion y en la que pactaron terminar sus diferencias en árbitros, contiene las cláusulas, de que ninguno de los dos contendientes interpondría recurso alguno del laudo que se pronunciara, bajo pena de multa de dos mil pesos; y de que el juicio arbitral se sustanciaría y fallaría en la ciudad de Puebla; que al notificarse á Langlo el nombramiento de tercero, y la prevencion de que nombrase persona con quien se entendiesen las diligencias posteriores en la Ciudad de Puebla, se opuso ante el Juez de Tlaxcala á que tuviese que ver en el negocio el de Puebla, manifestando que en todo caso el de Tlaxcala, siendo el de su domicilio y el del lugar del contrato, debería ejecutar los trámites del juicio arbitral; que una vez pronunciado el laudo y nombrado el tercero, Langlo interpuso el recurso de casacion ante el Tribunal Superior de Puebla, queriendo anular la escritura de compromiso y dando jurisdiccion á ese Tribunal que antes le negaba; y el mismo Tribunal no solo admitió el recurso de casación, sino que lo falló, destruyendo lo pactado en la escritura derivada de la transaccion, sugetando á los contendientes al juicio de contadores y determinando cancelar la escritura en que apoyaba Poli sus derechos: que segun consta de autos, nunca

consintió Poli en los procedimientos del Tribunal, y sí protestó de ellos diversas ocasiones.

Considerando: que la incompetencia del Tribunal de Puebla, no es de la que hablan los artículos constitucionales que el quejoso invoca, sino á la que se refiere el artículo 99 de la misma Constitucion; que por esta razon no son de admitirse los fundamentos y consideraciones en que apoya su sentencia el C. Juez de Distrito de Puebla; pues de lo contrario resultaría, que en toda competencia que se suscitara entre dos ó mas autoridades judiciales, cuyo conocimiento correspondiera á esta Suprema Corte, podrian sustanciarse y definirse con arrigio á la ley orgánica, de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, y no conforme á la ley de 17 de Abril de 1873, que fija la tramitacion de los recursos de competencia; que esta sustitucion de un procedimiento por otro no puede admitirse, por ser enteramente diversos juicios; el uno se reduce á practicar una simple revision, y en él no se admite como parte á las autoridades entre quienes se suscita la competencia, y en el otro caso se observa lo contrario. Por estas consideraciones y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Carta federal y ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

1.^o Que se revoca la sentencia del inferior de 23 de Mayo del año próximo pasado que declaró: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Don Vicente Poli contra el Tribunal superior del Estado, por haber conocido y fallado en el recurso de casacion interpuesto por Don Pedro Langlo, contra el laudo pronunciado por los árbitros en el negocio que sugetaron á su decision, sobre pago de la cantidad de cuatro mil ciento setenta y cuatro pesos treinta y cinco centavos; que deberá pagar la multa de doscientos pesos á que se ha condenado; que es de hacerse uso del apremio para que el C. Andrés Pineda cumpla con la prevencion de este Juzgado, contenida en auto de 21 de Abril del presente año, y por último, se con-

dena al C. Lic. Miguel M. Zárate, á una multa de cincuenta pesos, que enterará en la Jefatura de Hacienda.

2º Se declara que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Vicente Poli, contra los actos de que se queja, y para que ocurra á los tribunales en la mejor forma que le convenga.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de Distrito de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese, archivándose á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Iglesias.*—*Ogazon.*—*Garza.*—*Lozano.*—*Ordaz.*—*Ramírez.*—*Castañeda.*—*Castillo Velasco.*—*Auza.*—*Guzman.*—*Velasquez.*—*Zavala.*—*Landa*, secretario.

En copia. México, Abril 30 de 1874.—*Emilio Ordaz.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Ladislao Vega, en representacion del Cura de la Cañada, por violacion del art. 16 de la Constitucion.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

El Promotor fiscal dice: que en el juicio seguido por D. Feliciano Camacho, D. Manuel Nieto y D. José María Villa, contra el Cura de la Cañada D. José María Flores, éste por medio de su apoderado D. Ladislao Vega, ha interpuesto el recurso de amparo contra la intervencion del C. Ignacio de Loyola Trejo, como Ministro del Tribunal Superior, que resolvió una apelacion del quejoso. La garantía que se cree violada, es la del art. 16 del Código fundamental, que previene, nadie sea molestado en su per-

sona y bienes, sino por mandamiento de autoridad competente, cuya calidad se le niega al Magistrado Trejo, con motivo de algunas irregularidades en su eleccion.

Desde luego se ve, que esta eleccion fué calificada en tiempo y forma por la Legislatura del Estado, única autoridad competente para estimar su validez ó nulidad, (art. 63 de la Constitucion de Querétaro). No se comprende pues, bajo que aspecto el poder judicial de la Federacion pueda atribuirse la revision de un acto electoral perfecto y privativo del regimen interior de un Estado (art. 41 de la Constitucion federal.)

Cuando esta incompetencia (que hemos llamado otras veces de origen, para distinguirla de la que hace relacion al Orden en el ejercicio de las jurisdicciones, á cuya conservacion tiende el art. 16) se ha referido á los tribunales de los Estados para nulificar sus actos, se han desestimado las observaciones del Ministerio público, á la vez que se han atendido, cuando amparos de esta naturaleza se han dirigido contra los Gobernadores de hecho de los Estados. Esto dificulta la resolucion acertada del caso presente; pues si se sigue la práctica adoptada, hay que abandonar el sistema lógico de las consecuencias, que dimanando de un mismo principio debieran ser idénticas, sin limitarse á la competencia del poder judicial de los Estados, en lugar de extenderse á todos los poderes establecidos.

La regla, *ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*, aplicada como de interpretacion al debatido artículo 16, no debiera limitarse á los tribunales y jueces de los Estados, sino comprender á toda autoridad de cuya competencia se dudase. Sin embargo, al tratarse de funcionarios del Orden administrativo, cuyos actos se han reclamado por carencia absoluta de jurisdiccion procedente de vicios electorales, se ha decidido: que estos defectos ó incompatibilidades, son objeto esclusivo de apreciacion de las respectivas legislaturas. Así se ha esquivado el exámen del origen de su juris-